

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020).

Auto Interlocutorio No. _____.

MAGISTRADO PONENTE: FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

ACCIÓN:	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:	76001-33-33-005-2018-00026-01
DEMANDANTE:	FABIOLA INES BOLAÑOS Y OTROS
DEMANDADO:	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – REVOCA AUTO QUE NIEGA DECRETO DE PRUEBAS.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto nro. 721 del 18 de noviembre de 2019 proferido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cali en audiencia inicial, mediante el cual negó el interrogatorio de parte de los señores William Alfredo Galeno Bolaños y Jackeline Muñoz Cárdenas.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, la señora Fabiola Inés Bolaños y otros, demandan a la Fiscalía General de la Nación, para que se la declare administrativamente responsable por los perjuicios materiales y morales causados a los actores, a raíz de la privación injusta de la libertad que soportó el señor William Alfredo Galeno Bolaños.

II. LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio nro. 721 del 18 de noviembre de 2019¹, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cali en audiencia inicial, negó la solicitud presentada por el apoderado judicial de la parte demandante de citar a los señores William Alfredo Galeno Bolaños y Jackeline Muñoz Cárdenas a rendir interrogatorio de parte, por las siguientes razones:

“Respecto de la citación de los señores William Alfredo Galeno Bolaños y Jackeline Muñoz, para que declaren sobre la paternidad del señor William Alfredo Galeno Bolaños respecto de sus hijas menores de edad (Dana Sofía Muñoz Cárdenas y Briana Saray Muñoz Cárdenas)... se niega el interrogatorio de parte solicitada al señor William Alfredo Galeno Bolaños y Jackeline Muñoz, demandantes, por cuanto se considera que la misma solo procede para interrogar a la contraparte.

Es de aclarar que con el interrogatorio de parte se pretende dar certeza de los hechos del proceso y solo adquiere relevancia probatoria en la medida en que el declarante admita hechos que le sean perjudiciales o favorezcan a la parte contraria, es decir, que se busca

¹ Folio 132-141 del expediente.

obtener una confesión judicial de la parte interrogada, por lo que solo procede a solicitud de la contraparte o por el decreto oficioso.

En este caso dicha prueba resulta improcedente, dado que la entidad demandante cita a interrogatorio a los señores William Alfredo Galeno Bolaños y Jackeline Muñoz que no es contraparte dentro del proceso, sino un demandante”.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

El apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra el auto nro. 721 del 18 de noviembre de 2019 proferido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cali en audiencia inicial (Min: 26:40), argumentando lo siguiente:

“Si bien se negó la solicitud probatoria, la declaración del señor William Alfredo Galeno Bolaños y Jackeline Muñoz, debe tenerse claro que esa solicitud si bien son partes en el proceso no se hace con la intención de evidenciar algún tipo de circunstancia fáctica que intente demostrar la responsabilidad de las demandadas, sino que únicamente tiene como finalidad lo que se menciona en el párrafo segundo de la solicitud probatoria, donde el señor William Alfredo Galeno Bolaños ha sido padre de crianza de las menores Dana Sofía Muñoz Cárdenas y Briana Saray Muñoz Cárdenas, pero no ha sido reconocidas por el de manera documental y legítima, pero si fue el padre de crianza, en consecuencia sería la persona adecuada para referirse a ese tema y poder robustecer de alguna manera el vínculo que puede existir entre ellos, más aún recordándose que en reiteradas posiciones del Consejo de Estado se ha indicado que únicamente no se indemniza a quienes están ligados por consanguinidad en eventos de responsabilidad extramatrimonial del estado, sino que eventualmente lo puede hacer ciertas personas con filiación diferente o fuerte amistad que puedan haber sufrido algún tipo de detrimento”.

V. CONSIDERACIONES:

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011², el auto mediante el cual se niega el decreto o la práctica de una prueba es pasible del recurso de apelación, siendo competente en segunda instancia el Tribunal para desatar el mismo.

5.2. DEL DECRETO DE PRUEBAS

Conforme con lo establecido en el artículo 180³ de la Ley 1437 de 2011, en la audiencia inicial el juez decretará las pruebas pedidas por las partes y terceros, siempre que sean necesarias para demostrar los hechos sobre los cuales existe disconformidad.

² “Art. 243.- Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

(...)

9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.”

³ Artículo 180. Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvencción según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:

(...)

10. Decreto de pruebas. Solo se decretarán las pruebas pedidas por las partes y los terceros, siempre y cuando sean necesarias para demostrar los hechos sobre los cuales exista disconformidad, en tanto no esté prohibida su demostración por confesión o las de oficio que el Juez o Magistrado Ponente considere indispensables para el esclarecimiento de la verdad.

El artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, establece que en los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en materia probatoria, en lo que no esté expresamente regulado se aplicarán las normas del Estatuto Procesal Civil, hoy Código General del Proceso.

Por su parte, la Ley 1564 de 2012 en su artículo 168 establece que *“El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”*, así las cosas, de la norma en cita se colige que, para determinar el decreto de las pruebas solicitadas por las partes, se debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad.

5.3. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer si es jurídicamente procedente decretar la prueba solicitada por el apoderado judicial de la parte demandante, de llamar a los señores William Alfredo Galeno Bolaños y Jackeline Muñoz, parte actora, a rendir interrogatorio de parte en el presente proceso.

5.4. TESIS DEL DESPACHO

El Despacho revocará la decisión de primera instancia, en atención la declaración de parte solicitada por la propia parte demandante, es una prueba que además de conducente, resulta útil para esclarecer los hechos expuestos en la demanda.

5.1. RECUESTO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL:

El artículo 211 del CPACA dispone que los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código General del Proceso.

La finalidad de la prueba es llevar al Juez a la certeza o conocimiento de los hechos que se relatan en la demanda o en su contestación y su objetivo es soportar las pretensiones o las razones de la defensa. Para el efecto, la ley previó una serie de medios de prueba que pueden ser decretados en el marco del proceso, lo cuales están enunciados en el artículo 165 del Código General del Proceso⁴.

Así mismo, atendiendo la disposición contenida en el artículo 168 del Código General del Proceso, el Juez está facultado para rechazar mediante providencia motivada las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles, precepto que resulta aplicable por remisión del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; lo que quiere decir que las pruebas solicitadas deben ser conducentes, pertinentes y que versen sobre los hechos objeto del litigio.

⁴ “Artículo 165. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”.

En este sentido, sobre los elementos de los medios probatorios ha establecido el Consejo de Estado⁵ lo siguiente:

*“...La **conducencia** consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La **pertinencia**, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso. La **utilidad**, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, además de tener estas características, deben estar permitidas por la ley...”*

Ahora bien, en lo que respecta al medio probatorio denominado interrogatorio de parte, el artículo 198 del C.G.P. dispone: *“El juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso”*.

Por tratarse de una disposición cuya redacción varió frente a la contenida en el otrora artículo 294 del C.P.C.⁶, su interpretación no ha sido homogénea, pues da a entender que la confesión y la declaración de parte no han de estar concatenadas, al no señalar el condicionante que sea la contraparte quien pida dicha prueba. En punto al tema, el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección-“C”, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas⁷, el 9 de septiembre de 2019, sostuvo:

“ (...) Entonces, las modificaciones que introdujo el CGP, conducen, efectivamente, a que se abran nuevas vías interpretativas sobre la declaración de parte y la confesión que no encuentran una postura pacífica. De ello da cuenta la doctrina, que plantea una clara escisión entre la declaración de parte y la confesión, al no condicionarla a que la contraparte la haya pedido, o a que sea decretada por el juez de oficio. Posición opuesta al desarrollo que se hizo durante muchos años de las normas del CPC sobre la materia, que sostenía que, debido a que la declaración de parte tenía la finalidad de buscar la confesión, no era posible que la misma declarante la pidiera

Incluso, es preciso indicar que, hasta el momento, esta discusión no ha sido desatada a nivel por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, por lo que la aplicación normativa de la declaración de parte está determinada por la interpretación razonable que los jueces hagan en el caso concreto a partir de los elementos del mismo. En especial a partir del escenario fáctico que exija determinados medios de prueba (...)”.

Pues bien, este juzgador considera que con las normas procesales actuales es factible que una de las partes solicite su propia declaración en el proceso, si en cuenta se tiene, primero, que desaparece la exigencia del antiguo artículo 203 del C.P.C., donde se señalaba que el interrogatorio era a instancia de parte, al indicar que: *“cualquiera de las partes podrá pedir la citación de la contraria”*. En cambio, si se analiza detenidamente la teleología del actual artículo 198 del C.G.P., allí solamente se alude a la citación de las partes de oficio o a solicitud de parte.

De otro lado, conforme lo indica el artículo 165 del CGP, la confesión y la declaración de parte se tienen como medios de prueba diferenciados y, finalmente, el artículo 191 del CGP en el último inciso señala que: *“la simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas”*, hecho indicativo de que si en una declaración no es posible obtener una confesión, en todo caso, el dicho del declarante puede

⁵ Consejo de Estado, Sección Cuarta, Auto del 19 de agosto de 2010, Consejero Ponente: Dr. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS, radicación número: 25001-23-27-000-2007-00105-02(18093).

⁶ Artículo 294. Interrogatorio de parte. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Cuando una persona pretenda demandar o tema que se le demande, podrá pedir, por una sola vez, que su presunta contraparte conteste el interrogatorio que le formule sobre hechos que han de ser materia del proceso. En la solicitud se indicará sucintamente lo que se pretenda probar”.

⁷ Radicación número: 11001-03-15-000-2019-03546-00(AC)



RADICACIÓN : 2018-00026-01
Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA
Demandante : MARIA RUBY RIASCOS SUAREZ Y OTROS
Demandado : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI Y OTROS

5

contrastarse con los demás medios probatorios y valorarse conforme a las reglas de la sana crítica como lo exige el artículo 176 del CGP, que establece las directrices para la apreciación de las pruebas.

En este punto, es pertinente traer a colación un reciente pronunciamiento efectuado por el Consejo de Estado, del cual se resalta lo siguiente:

*“...La prueba de declaración de parte se encuentra regulada en el Código General del Proceso en los artículos 191 a 205. De acuerdo con lo precisado por esta Corporación⁸, “[...] **el interrogatorio de parte** es un medio probatorio que reviste una especial connotación en el curso de un proceso, en la medida en que **es una prueba que se origina en la declaración de una de las partes, sobre hechos que interesan al proceso**. Esta declaración, tiene origen en la respuesta a una serie de preguntas formuladas por la parte interesada en llevar a cabo el medio probatorio, erigiéndose éste en una forma de provocar la confesión”.*

La doctrina nacional ha señalado igualmente que “Este medio de prueba tiene como finalidad permitir que las partes, es decir, quienes se hallan ubicados como demandantes o demandados o quienes tienen la calidad de otras partes y excepcionalmente, en casos taxativamente señalados por la ley, otros sujetos de derecho distintos de los anteriores que estén habilitados para rendir esta clase de interrogatorio, presenten su versión acerca de hechos que interesan al proceso con la posibilidad especial de que si se dan los requisitos que la ley prescribe, de su versión se estructure una confesión....”^{9 10}

Lo anteriormente mencionado, sirve de sustento para afirmar que el propósito esencial del interrogatorio es permitir que las partes presenten su versión acerca de los hechos que interesan al proceso y que no siempre a través de este se va generar la confesión. Dicho de otro modo, no todas las declaraciones que haga la parte llamada a rendir su versión han de ser consideradas confesión; diferente sería si las preguntas que se le formulen están orientadas a buscar la aceptación de hechos que perjudican al declarante.

El profesor Hernán Fabio López Blanco, en su libro CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – PRUEBAS, al respecto enseña (página 186):

“(...) disposición que representa un significativo avance en lo que con este medio de prueba concierne debido a que como lo advierte la profesora Adriana López: “El procedimiento judicial colombiano sufrió importantes cambios al pasar de un sistema esencialmente escrito a uno mixto con preponderancia de la oralidad como lo es el proceso por audiencias. Lo anterior sin duda alguna también conllevó un cambio destacado en la regulación de los medios de prueba en concreto, para dar paso a la declaración de parte como un medio de prueba autónomo, distinto de la confesión.

“Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario desterrar viejas tesis, prácticas y creencias soportadas en la nueva regulación legal para cuyo desarrollo es menester un cambio de mentalidad tanto en el abogado como en el operador de la justicia pues es frecuente la tendencia a seguir anclados en lo pasado.

Y es precisamente la declaración de parte como medio de prueba autónomo, una de esas instituciones que por muchos años estuvo arraigada en la mente de los abogados y

⁸ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Auto de 10 de julio de 2013. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00957-01(46314).

⁹ LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Pruebas. Dupre Editores Ltda. Bogotá. 2017. Páginas 175 y 176.

¹⁰ Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00323-00, providencia del 25 de junio de 2019, C.P. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ.

jueces como prohibida y excluida. Dicha exclusión, se fundamentó en la máxima de que nadie pueda hacer con su propio dicho prueba de lo que dice, y en el desconocimiento del valor probatorio o la fuerza de convicción al testimonio de parte favorable a ella misma, corta interpretación que cercenó los alcances de uno de los más útiles medios de prueba, pues nadie más llamado a conocer las intimidades de su caso que la parte misma.

Muchos años antes de que se promulgará el Código General del Proceso el maestro DEVIS ECHANDIA señaló: “no vacilamos en incluir la declaración de parte en el grupo, más general, del testimonio como fuente de prueba”, y admite que las restricciones, limitaciones y prohibiciones para la práctica del interrogatorio no tienen justificación. Acogiendo las indicaciones anteriores, se establece en el Código General del Proceso, que se podrá ordenar por “solicitud de parte” la citación “de las partes”, expresión primera que conlleva un drástico cambio de lo que había sido en el pasado una posibilidad atribuida solo a “la otra parte” para pedir la citación de la “parte contraria”, porque ahora al estar la parte, cualquiera de ellas, pues en donde la ley no distingue el intérprete no lo puede hacer, autorizada para pedir la citación de las partes, emerge con claridad que en el sistema procesal colombiano incuestionablemente se acogió a la posibilidad de solicitar la práctica del interrogatorio de la misma parte, lo que sin duda es de gran utilidad, debido, a que, tal como lo señala el ya citado ensayo de Adriana López, según “Capelleti, la parte es el sujeto mejor informado del caso en concreto que en el proceso se debe examinar. De ahí la inderogable necesidad que en todos los ordenamientos civiles existe, de utilizar a la parte como fuente de prueba.

Y es que en un sistema, en esta materia castrado, como lo era el del C.de P.C. derogado, salvo que el juez decretara la prueba de oficio, lo que no era frecuente, únicamente era posible recibir la versión de la misma parte, si la otra había solicitado la prueba, es decir que quedaba en sus manos decidir si se escuchaba o no a la otra parte, lo que sin duda constituyó un sistema desueto y arcaico, incuestionablemente en buena hora abolido.

Así las cosas, es viable que la misma parte solicite que se le reciba la declaración de parte, prueba que estará sometida a los requisitos previstos en el artículo 202 del CGP, (...). (Negrillas y subrayas fuera del texto original).

Acorde con lo anterior, considera este Despacho que el interrogatorio de parte, en los términos en que se encuentra consagrado actualmente en el artículo 198 del C.G.P., puede ser solicitado por cualquiera de quienes actúan como parte en el proceso, indistintamente de que sea la propia parte demandante quien lo pida.

5.5. CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 320¹¹ del C.G.P, aplicable por remisión del artículo 306¹² del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

A su turno, el artículo 328 ibídem dispone entre otros aspectos que: “el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el

¹¹ Artículo 320. Fines de la apelación.

El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.

¹² ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.



apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”.

Del tenor literal de la norma en cita, concluye el Despacho que la voluntad del legislador es que, en virtud del recurso de apelación el superior estudie y revise la decisión proferida por el *a quo*, pero con una característica especial, y es que dicha instancia se limita a aquellos precisos cargos expuestos por el recurrente al sustentar su inconformidad, los cuales, se encuentran limitados, en virtud de la congruencia, a lo decidido por el juez en primera instancia.

En el presente asunto, el apoderado judicial de la parte demandante solicitó en el acápite denominado “PRUEBAS QUE SE PRETENDEN HACER VALER”¹³, que se escuche a los señores William Alfredo Galeno Bolaños y Jackeline Muñoz Cárdenas, para que declararen sobre la paternidad del afectado respecto a las menores Dana Sofía Muñoz Cárdenas y Briana Saray Muñoz Cárdenas.

El Juzgado Quinto Administrativo de Cali, en la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, negó el decreto y práctica de dicha prueba tras considerar que la prueba era improcedente, dado que el “*interrogatorio de parte*” está previsto, para la declaración solicitada por la contraparte, y en el caso que nos ocupa, quien la solicita es la propia parte demandante, lo que podría conllevar a una confesión de la parte con su declaración.

Frente a dicho argumento, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación, aduciendo que dicho interrogatorio es necesario para demostrar la relación de padre de crianza que ostentaba el señor William Alfredo Galeno Bolaños, respecto de las menores Dana Sofía Muñoz Cárdenas y Briana Saray Muñoz Cárdenas.

Teniendo en cuenta los anteriores lineamientos, sea lo primero indicar que la Ley 1437 de 2011-CPACA-, no consagra la figura procesal de la “*declaración de parte*”, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 211¹⁴ y 306¹⁵ ibidem, en el presente caso debe darse aplicación a las normas contenidas los artículos 191 a 205 del Código General del Proceso, que consagran entre otros, el mencionado medio de prueba.

Pues bien, este Despacho reitera que el interrogatorio, en los términos en que se encuentra consagrado en el artículo 198 CGP, puede ser solicitado por cualquiera de quienes actúan como parte en el proceso, indistintamente de que sea la propia parte demandante quien lo haga. Por lo tanto, el testimonio de quien sea parte en un proceso judicial, en este caso demandantes, con las precisiones efectuadas, no está prohibido ni restringido, y es dable decretarlo.

¹³ Folio 132 del expediente.

¹⁴ Artículo 211 CPACA “...*Régimen probatorio. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que esté expresamente regulado en este Código, se aplicaran en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil*”.

¹⁵ Artículos 306 CPACA “*En los aspectos no regulados. En los aspectos no contemplado en este Código se seguirá el Código de Procedimiento civil en lo que sea compatible con la naturaleza del proceso y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.*”

No obstante, no debe dejarse de lado el análisis de los criterios de conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba solicitada para cada caso concreto, y que dichas declaraciones deben ser valoradas en todos sus aspectos, como los de credibilidad, imparcialidad, espontaneidad, utilidad, subordinación, entre otros, e incluso a la parte contraria se le otorgan instrumentos para impugnarlos y controvertirlos y el "Juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso" (Artículo 211 y 176, CGP).

En el sub-júdice, lo que se pretende con tales interrogatorios es probar que el demandante William Alfredo Galeno Bolaños, es el padre de crianza de las menores Sofía Muñoz Cárdenas y Briana Saray Muñoz Cárdenas, y que ha velado por su manutención y sostenimiento, situación que a todas luces bien puede ser dilucidada con dicho medio de prueba, máxime que la parte actora no cuenta con otros testimonios para ello.

Así las cosas, la decisión de negar las aludidas declaraciones de parte, no es acertada y contrario a lo resuelto por el juez a-quo, las normas jurídicas procesales lo permiten, en tanto está contemplado como medio de prueba en el C.G.P. y los mismos se relacionan con los hechos del debate procesal, amén de que fueron pedidos en su debida oportunidad.

De suerte que, este Despacho revocará el auto interlocutorio nro. 721 del 18 de noviembre de 2019, proferido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cali, y, en su lugar, ordenará a la autoridad judicial de primera instancia, que proceda a decretar y recepcionar las declaraciones de parte solicitadas por la parte demandante.

En consecuencia, se;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto interlocutorio nro. 721 del 18 de noviembre de 2019, proferido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cali, en cuanto negó el interrogatorio de parte, solicitado por la parte demandante. En su lugar, **ORDÉNASE** al juez a-quo que decrete y recepcione la declaración de parte de los señores William Alfredo Galeno Bolaños y Jackeline Muñoz Cárdenas, acorde con lo explicado precedentemente.

SEGUNDO: En firme la presente decisión, remítase el expediente al Juzgado de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ
Magistrado